

## JUSTICIA, GRACIA Y GOBIERNO EN LA CASTILLA BAJOMEDIEVAL Y MODERNA: DOS RECIENTES APORTACIONES.

por Jon Arrieta Alberdi

-DE DIOS, Salustiano, *Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 430 págs.

- GARRIGA, Carlos, *La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525). Historia política, régimen jurídico y práctica institucional*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, 502 págs.

La Baja Edad Media fue para el reino de Castilla un periodo en el que la consolidación de los órganos reales de administración de justicia y gobierno estuvo muy condicionada por los largos años de minoría de algunos reyes y por enfrentamientos civiles. Desde el punto de vista de la historia institucional, los trabajos que -sobre todo en las dos últimas décadas- se han ocupado de la formación y consolidación del Consejo, Chancillerías y Audiencias reales como conjunto de órganos dotados de la jurisdicción real en sus máximos grados han tenido muy en cuenta esos factores, puesto que han tenido su influencia en la conformación de dichos órganos.<sup>1</sup> Es el caso de los dos libros que traigo a este comentario.

---

1. Precisamente GARRIGA es autor de unas "Observaciones sobre el estudio de las Chancillerías y Audiencias castellanas (siglos XVI-XVII)", en *Hispania entre derechos propios y derechos nacionales*, Atti dell'incontro di studio Firenze-Lucca, 25, 26 y 27 mayo 1989, Milán, 1990, II, pp. 757-803. Se trata de una magnífica exposición del "estado de la cuestión". Para una visión más amplia de la historiografía procesal, en este mismo volumen, puede consultarse la valiosa y muy útil aportación de Jesús VALLEJO, "Historia del proceso, procedimiento de la historia. Diez años de historiografía procesal en España (1979-1988)", pp. 885-921.

Carlos Garriga aporta un análisis riguroso para el conocimiento de las Chancillerías y Audiencias castellanas, documentado desde el interior de estas instituciones a través de su propia práctica. Salustiano de Dios, el máximo especialista en el Consejo Real castellano, hace lo propio a través de la monografía en la que vierte sus investigaciones sobre el Consejo de la Cámara.

Si bien, como decía anteriormente, estos órganos cubren un ciclo muy amplio de su trayectoria en la Baja Edad Media, en el caso hispánico el reinado de los Reyes Católicos va a imprimir un sello propio a Consejos y Audiencias en los dominios dinásticos de ambos cónyuges. En las dos obras se destaca sobradamente este hecho, en lo que a Castilla se refiere, lo que por sí solo justifica traerlas a esta revista de historia moderna.

Aunque estas instituciones adquieren un considerable grado de madurez en los siglos bajomedievales, la cronología que cabe -y a mi entender se debe- considerar para ser coherentes desde una perspectiva histórico-jurídica, debe contemplar Consejos y Audiencias como órganos de administración de justicia y gobierno que se empiezan a organizar en el siglo XIII con arreglo a los moldes procesales suministrados por las dominantes concepciones romano-canónicas, de modo que el ciclo está lo suficientemente completo a fines del siglo XIV como para que estos órganos mantengan lo sustancial de su estructura hasta la Codificación. La primera parte de ese ciclo (hasta mediados del siglo XVI) es abordada por Garriga y De Dios con esa perspectiva, a través de estos dos libros que constituyen una aportación fundamental para el conocimiento de estas nucleares instituciones. Los caracteres de que quedarán dotadas éstas son: ejercicio de la jurisdicción por distritos territoriales cada vez más racionales; gradación jerárquica en instancias; composición predominante o exclusiva de letrados; disposición de una última instancia de apelación y suplicación junto al rey, que controla e incluso dirige los procedimientos de las instancias inferiores, a través de la reserva o "retención" de mecanismos de avocación y reclamación de asuntos y pleitos; consolidación de la función de órganos ejercientes de la jurisdicción real tanto por vía de justicia como de gobierno; decisión colegiada por emisión de votos individuales, lo que eleva el voto a acto de ejercicio de la jurisdicción por excelencia; ritmos y plazos largos, con incidencias múltiples en la marcha del proceso, lo que termina influyendo en el resultado (recusaciones, suspensiones, instrucciones, etc.)

Si bien estas dos monografías se refieren a Castilla, puede decirse que todos los reinos hispánicos, dentro de las corrientes dominantes romano-canónicas, presentan manifestaciones institucionales no exentas de semejanza. La pluralidad de ámbitos de decisión jurídica, repartidos por los reinos con reconocimiento de su existencia y legitimidad para dar vida a su jurisdicción, tenderá a ser organizada districtual y jerárquicamente. En el ámbito hispánico ello se produce cuando el *Ius Commune* proporciona los instrumentos que se requieren para organizar el proceso, hacer más racional la distribución del territorio, a modo de distritos coherentes, y la red de órganos que aseguren el correcto ejercicio de la jurisdicción, dentro de la cual la propia estructura permitirá establecer un último y definitivo grado. De ese modo, jurisdicción, territorio y jerarquía de “*iurisdicentes*” hacen posible que los conflictos necesitados de solución puedan recorrer un camino que, en su caso, les pueda conducir a la máxima autoridad jurisdiccional, que ha de recibirlos, oírlos y resolverlos.

Los reinos hispánicos altomedievales, organizados en torno a la casa del rey y a sus órganos domésticos, se van a apoyar en uno de ellos, el canciller, para llevar a cabo el programa de racionalidad y jerarquización citado. El canciller reunirá junto a sí a letrados, peritos conocedores de la doctrina romano-canónica y, al mismo tiempo, de los ordenamientos especiales de los territorios de los que, frecuentemente, proceden. La obra de Garriga y la de De Dios coinciden en prestar la debida atención a la Cancillería regia bajomedieval, en la que se desenvuelve, en definitiva, el monarca en el ejercicio de sus funciones, y proporciona los medios materiales y humanos que van generando órganos de asesoramiento y decisión en esa suprema instancia. Presididos por el rey, oyen las suplicaciones que pueden llegar en forma de pleitos o de cuestiones de gobierno necesitadas de respuesta y las resuelven. En el primer caso, se pronunciará una sentencia en vía contenciosa. En el segundo, se dictará una provisión que, si lesiona intereses legítimos de terceros, dará lugar a la conversión de la cuestión en un pleito que se resolverá por los cauces ya plenamente procesales de la misma Audiencia. Es el nombre que tienden a tomar estos órganos, inherentes al máximo titular de la jurisdicción, que actuarán como órganos de decisión en vía de gobierno y justicia.

El libro de Garriga describe este proceso para la Castilla bajomedieval, con detalle y rigor. Sus aportaciones anteriores al análisis de estos órganos<sup>2</sup> le permiten apoyar su exposición en el plano metodológico del

continuo contraste documental que otorga una solidez fehaciente a la exposición. Ésta atiende detalladamente al proceso de formación de la Corte como centro de recepción y decisión última (desde Alfonso X); al desgaje de una Audiencia (desde Alfonso XI) que empieza a mostrar su personalidad propia y su tendencia a ubicarse en las dependencias del canciller, que tenía la custodia y el uso de los sellos reales. Ante el compromiso inevitable en los estudios institucionales de fechar su nacimiento, el autor aporta convincentes argumentos para situarlo en 1371, cuando la Audiencia recibe, en Toro y con ocasión de Cortes, una ordenación precisa que la “constituye” como tal.

Garriga cuida de la conexión entre la fase descriptivo-orgánica y la funcional-política. En eso coincide, como en algunas cosas más que citaré, con De Dios. Ambos no pierden de vista la convulsa Castilla bajomedieval, que necesitó recurrir a un supremo árbitro que mediara en las tensiones y conflictos entre la nobleza.

A la general tendencia a constituir bandos y facciones, que habitualmente terminan siendo dos, corresponde también la necesidad inevitable de que sea una sola la autoridad máxima. Garriga se adhiere a esa imagen binaria, siguiendo a Gerbert, en la que la posición regia tampoco es plenamente autónoma y autosuficiente. En Castilla, los periodos de minoría de edad de los reyes y los enfrentamientos civiles lo hicieron particularmente difícil. También fue tardía la plena subordinación a la potestad suprema del rey, puesto que la nobleza se resistió a reconocerle el monopolio de la dispensa del alto gobierno y justicia y no se privó de quitársela cuando la situación lo requirió, como detalladamente refiere el autor, en la estela de su maestro el prof. González Alonso, al reflejar este fenómeno en la farsa de Ávila.

La exposición de Garriga topará, lógicamente, con el momento en el que, además de la Audiencia, se afianza el Consejo en el ámbito de la Casa del Rey, al tiempo que la Audiencia lo hace en el de la Corte y Chancillería (fiel, en este aspecto, al esquema proporcionado por García Gallo).<sup>3</sup> Defiende, convincentemente, que la creación y el afianzamiento del

---

2. “Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la visita del Ordenamiento de Toledo”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXI (1991), pp. 251-390.

3. “La Audiencia de Indias. Su origen y caracteres”, en *Memoria del segundo Congreso Venezolano de Historia*, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1975, I, pp. 359-432.

Consejo contribuyeron a una mayor definición de la Chancillería-Audiencia como última instancia judicial. Sentada esta premisa, la amplia exposición de Garriga sobre la relación entre Consejo y Audiencia, en la que no falta el diálogo a veces intensamente dialéctico con De Dios, permite llegar a la conclusión de que hubo una actuación complementaria entre ambas instituciones. Que el Consejo sea órgano predominantemente de gobierno y que la Chancillería-Audiencia lo sea de justicia, no impide que el rey interfiera en la segunda frecuentemente a través del primero. Tampoco impide que el Consejo reciba y resuelva -por sentencia- pleitos, incluso en la cantidad necesaria como para tener que desprenderse de ellos y trasladarlos a la Audiencia. Ahora bien, ésta no tiene cerradas las puertas para actuar como órgano de gobierno al margen, aunque siempre cerca, del cauce estrictamente judicial. La relación mutua entre Consejo y Audiencia, la plantea Garriga sobre la base de una distinción instrumental entre Política y Derecho de modo que el Consejo tendría una tendencia a la actuación sobre criterios preferentemente gubernativos, en virtud de los coyunturales intereses “políticos” de los reyes, mientras que la Audiencia, órgano judicial más definido, serviría de base a una acción procesal más ajustada a la justicia recta e imparcial. Ahora bien, la compatibilidad citada, la actuación de ambos órganos a través -indistinta, simultánea, alternativamente- de cauces judiciales y gubernativos, impide llevar la distinción a sus últimas consecuencias.

Las conclusiones de Garriga reflejan el carácter circular del ejercicio de la máxima jurisdicción, entendido como un conjunto de medios resolutivos divididos en fases o tramos, relacionados entre sí y concentrados en el entorno regio. El conjunto forma un “aparato” instrumental en el que, como destaca el autor, se trata de garantizar al rey la posibilidad de tener el «control sobre la solución del caso» (p. 163), mediante mandatos reales tomados en vía de gobierno o, incluso, como señala Garriga, por simples recomendaciones o actos, formalmente, de merced.

Comparece, así, la actuación graciosa a la que De Dios dedica la monografía que traemos aquí. De Dios se había ocupado del Consejo y, al estudiar su actuación, había reparado en el sector específico de la gracia, lo que le había conducido a dar un paso más y centrarse en el espacio reducido que el rey se reserva para su actuación directa en «negocios arduos» y para el despacho directo de los asuntos que le competen de manera exclusiva como regalías.

En la parte dedicada a la historia del órgano y su función, para el período comprendido entre los reinados de Alfonso el Sabio y Pedro I, se destacarán las reacciones foreras, especialmente contra el primero, aunque el balance final de potenciación de la nobleza sea claro, y se confirme con Alfonso XI. Éste último dará pasos decisivos en el camino de situar al rey como pieza clave del sistema, lo que se reflejará en una mejor delimitación de las regalías que le corresponden como tal. En su ejercicio aparece la utilización de vías de hecho, que irán preparando manifestaciones más claras del absolutismo regio. Éste se mostrará de manera cada vez más clara en sus formas orgánicas y cancellerescas, con una Audiencia y un Consejo (1385), dentro del cual se distingue claramente una actuación en vía secreta o reservada, directamente con el rey. Juan II la utilizará abundantemente, en la forma sistemática que dará lugar a la confección de los correspondientes formularios, muestra significativa de la institucionalización de la función.

Los Reyes Católicos llevarán a cabo una labor de consolidación y perfeccionamiento de la estructura de todo el aparato de alta justicia y gobierno (desdoblamiento de la Chancillería y creación de Audiencias, como luego veremos). En el despacho por vía directa sin audiencia de partes, heredan una práctica ya consolidada, pero avanzan en su especificación, ya que, hacia 1510, se empieza a distinguir dicho procedimiento bajo la condición y denominación de “vía de Cámara”, diferenciada de la del Consejo. Tal sería el punto, ya bastante definido (dos letrados del Consejo y un secretario), en el que queda la institución con los Reyes Católicos. Enfrentado a la cuestión de la fecha precisa de creación, el autor, aunque la sitúa definitivamente en el reinado de Carlos I, descarta los años 1518-1523 y se inclina por considerar el de 1528 como el de inicio de la institución, fundamentado en una instrucción y en el uso cada vez más frecuente de la expresión “Consejo de la Cámara”. Como se diría entonces, en expresión que tomo de su aplicación al Consejo de Italia, la Cámara “se acabó de formar” en 1588, cuando el autor sitúa el “arranque decisivo” de la institución.

La segunda parte enfoca, en primer lugar, premisas planteadas de la misma manera en “El Consejo Real”: denominación, sede y naturaleza. En cuanto a esta última, se avanza una definición (p. 209) en la que el autor se inclina por considerar a la Cámara como una «vía de expedición de negocios, alternativa en ocasiones respecto al Consejo Real y especí-

fica en otras, por causa de sus competencias de gracia y merced», cuyo nacimiento se explica como recurso a una fórmula híbrida entre la unipersonal de los secretarios y la colegiada de los Consejos. La composición mixta favorecía la agilidad del trámite y la disponibilidad regia, pero también el cuidado de la intervención de al menos un letrado. Estos caracteres se adquieren de forma progresiva, si bien están perfectamente presentes en el reinado de los Reyes Católicos, de modo que hay un proceso de consolidación que culmina con las ordenanzas de 1528. El afianzamiento de la personalidad de la Cámara se asegurará cuando se distinga su campo del propio del Consejo de Castilla: este último se encargará de los asuntos de justicia, y la Cámara, de los de gracia que no afecten intereses de partes.

En la exposición del profesor salmantino destaca la oposición vía de hecho - vía de derecho, para situar el ejercicio de la gracia por vía de cámara en la primera. Está tan presente en la obra, que se eleva, a mi modo de ver, en elemento básico de su concepción: se afirma, de forma conclusiva, que «la Cámara [...] nunca dejó de representar un despacho secreto y personal del monarca, a él reservado. Campo propicio, pues, para el desarrollo del poder absoluto del príncipe, para la vía de hecho, frente a la de justicia» (p. 104). Su característica sobresaliente, “de entrada”, precisa el autor, será la de ser un «procedimiento de hecho frente al de justicia o de derecho, con audiencia de partes» (p. 145).

Para ilustrar fundadamente el cuadro de utilización continuada de vías de hecho en el ejercicio de la función graciosa, De Dios aporta documentación y casos ejemplares que permiten constatar la valoración negativa, incluso peyorativa, de la cuestión, certificada por las numerosas quejas de los perjudicados contemporáneos. No son raros los casos en que tales quejas se refieren a actuaciones perjudiciales sufridas una vez se había entrado en la vía de justicia. En este punto, la labor investigadora documental del autor llega a los mejores resultados, al imprimir mediante aquélla, vida y realismo a la compleja y conflictiva Castilla bajomedieval, en la que la potestad de beneficiar, privilegiar y dispensar, incluso en vía de justicia, fue profusamente utilizada por los reyes; de lo que se deduce el cuadro de un funcionamiento real de las máximas potestades como actuaciones fácticas, que dan lugar a frecuentes quejas y agravios.

El problema está en ser el propio rey quien decide si su acción está o no justificada. Ello nos lleva a la “eterna” cuestión de la necesidad de

causa (prevenir males mayores, la conveniencia del orden social o económico o razones de alta política) y la de si el ordenamiento está provisto de vías ulteriores de defensa o rectificación ante decisiones adoptadas prescindiendo del derecho, o de procedimientos para suspender la ejecución de la decisión mediante comprobación de su idoneidad.

En definitiva, el ejercicio del absolutismo regio nos lleva siempre a hacer una valoración de las garantías con las que contaban las partes, las posibilidades de recurrir las decisiones y actuaciones fácticas sobre todo. En la parte del libro dedicada a los primeros Trastámara no se acude demasiado a este aspecto, y cuando se hace, tras haberse insistido tanto en el aspecto fáctico de la vía de cámara, tras haberse destacado la utilización acentuada de la vía reservada y secreta, resulta un tanto llamativa la afirmación, referida a la época de los Reyes Católicos, de que tales garantías existían y que, además, «la posibilidad de recurrir de sus actuaciones (de la Cámara) en grado de suplicación ante el Consejo de Castilla» era lo normal (p. 151).

En el capítulo dedicado a la “Actuación y funcionamiento” se presenta también un ejercicio más normalizado y contenido de la función graciosa. Para empezar, se precisa claramente que habitualmente el expediente se iniciaba a instancia de parte interesada, se informaba la petición precisamente como cometido específico de la Cámara (p. 383) y decidía, en función de todo ello, el rey. A continuación se contempla también con plena naturalidad la fase de posible recurso contra la provisión adoptada, esta vez en vía de justicia y generalmente ante el Consejo Real. En este capítulo no aflora apenas el tono de excepcionalidad y exorbitancia presente en otros y se constata con claridad y naturalidad que los recursos y mecanismos garantistas no están ausentes en Castilla (p. 410), al menos en el período (1474-1530) en el que se centra el libro.

La gran complejidad de la cuestión, atendida mediante el análisis en que se liga acertadamente lo histórico y lo jurídico, tiene otro punto de compromiso para cualquier autor que se acerca a esta materia. La gracia, desde el punto de vista meramente procedimental, ofrece rasgos bastante claros, pero la cuestión se complica si queremos especificar en qué se resuelve sustantivamente aquélla. Una primera aproximación, la obtiene el autor de una fuente a mi modo de ver muy adecuada: un formulario de finales del reinado de Juan II (p. 106), que le sirve de base para sistematizar luego las *atribuciones* de la Cámara (los puntos 4-13 de la



segunda parte), y que son las siguientes: participación en Cortes; patronato eclesiástico; concesiones de nobleza; oficios públicos; cartas de naturaleza, perdones y legitimaciones; mayorazgos; licencias, dispensas y habilitaciones; intervención en la administración de justicia; mercedes y “otras competencias”.

Esta completísima relación obliga a plantearse la cuestión de qué representa el ejercicio de todas estas competencias tomadas en su conjunto, superando la consideración individualizada de las mismas. Los múltiples y complejos problemas que rodean a esta cuestión, los resuelve el autor de forma original, al considerar que la gracia y la merced están llenas de «naturales inclinaciones hacia campos como la justicia, el gobierno y las leyes». A través de un detallado seguimiento, por vía de contraste y comparación, se describen (en el fundamental apartado del libro que ocupa las páginas 274-293) “*las múltiples caras de la gracia regia*”. Para De Dios una de ellas, por la razón procedimental de utilizarse la vía de expediente, es la de ser parte de la actividad de gobierno (p. 284). Pero añade: una cara más de la gracia. Aunque pueda tratarse de ver la otra cara de una misma moneda, yo me inclinaría más por concluir que la gracia es una cara del gobierno, pues me parece claro que *el conjunto* de la actuación graciosa proporciona ese resultado, puesto que se trata de decisiones tomadas no de forma aislada, sino en relación a la realidad del momento en virtud de una consideración de los factores concurrentes y teniendo en cuenta las resoluciones anteriores y posteriores al caso. Y es precisamente en el tratamiento que el autor hace de la actuación y funcionamiento de la Cámara, sobre todo en lo referente a los trámites de justificación e información (pp. 383 y ss.), donde encuentro motivos para ello, al considerar que las decisiones puntuales sobre las medidas solicitadas, no dejan de tener puntos de conexión y permiten, exigen, una perspectiva global.

Ejercicio de la gracia, imposición de lo puramente fáctico, el problema de las garantías y posibilidades de recurrir, nos conducen hacia el final de la obra a una afirmación valorativa sustancial: «el principio de legalidad, tan defendido por muchos autores contemporáneos para aquellos tiempos históricos, no queda muy bien parado a la vista de esta serie de documentos» (p. 364). Ahora bien, tal vez el propio autor no es ajeno, como estudioso de la cuestión y jurista, a la dificultad de encontrar un punto de equilibrio, pues se manifiesta en términos muy positivos respec-

to a la existencia en Castilla de medios para la prevención o resolución de decisiones de legalidad dudosa (p. 410).

Es preciso destacar, con el autor, que la intervención de la Cámara como órgano de información fue cada vez más intensa y se consagra en la instrucción de 1528, lo que hace previsible, como apunta aquél, que la Cámara, y por ende el rey, vaya cada vez más encaminada por la senda de «... solicitar información de alcaldes y corregidores, con interrogatorio de testigos incluido, a fin de evitar lesiones de derechos de partes, no menos que en prevención también de recursos». De todo ello, creo que sería correcto sacar la conclusión de que la institucionalización de la Cámara contribuyó a una normalización y ejercicio de la función graciosa, en la medida en que supuso una mayor racionalización, sistematización y control sobre la discrecionalidad regia. No se trataría de una mera limitación del absolutismo regio, entendido como capacidad de sobrepasar el listón del derecho, sino de encaminarlo adecuadamente. El autor apunta, en varias ocasiones, a la “progresiva” orientación hacia esa línea adoptada en Castilla en las fechas en que, precisamente, detiene el estudio. Momentáneamente, supongo, como primera parte en la que se ha cubierto el objetivo de analizar, incisiva y casi exhaustivamente, las múltiples caras de la gracia regia en la Castilla de la Baja Edad Media e inicios de la Moderna.

Tanto Garriga como De Dios proporcionan un riguroso y detallado seguimiento de la trayectoria histórica de las instituciones estudiadas y un preciso análisis de su estructura orgánica. Los Reyes Católicos reglamentan la Chancillería (1489), proceden a su desdoblamiento -fijando dos distritos con el río el Tajo como divisoria (a la de Valladolid se añade en 1494 la de Ciudad Real, trasladada en 1505 a Granada)- y crean las Audiencias de Sevilla (1492) y Galicia (1494), al tiempo que procuran alcanzar las máximas garantías de composición, a través de la figura del letrado, eminentemente técnico, imparcial, sujeto al debido control de su actuación (apartado, éste, en el que Garriga demuestra saber aprovechar sus estudios sobre la visita) y “aislado” de su entorno para poder dictar sus resoluciones sin la presión de las luchas y tensiones sociales.

La(s) Chancillería(s) se describen como órganos unitarios, pero complejos, en las que descuelga la Audiencia, que trata los pleitos civiles y recibe las apelaciones de otras dos secciones de la propia Chancillería: la del Juez Mayor de Vizcaya (residente en la Chancillería de Valladolid)

y un tribunal de los alcaldes de los hijosdalgo. Los Alcaldes de Corte ocupan la sección criminal. Pero es el presidente de la Audiencia el que dirige todo el conjunto institucional. Garriga aclara perfectamente las distinciones orgánicas y terminológicas, que finalmente se inclinaron a la denominación que se asienta en el cargo originariamente doméstico del Chanciller y dieron lugar a que se impusiera el término Chancillería.

Como hemos visto, serán también los Reyes Católicos los que distingan una Cámara diferenciada. La concentración de poder que implica el ejercicio de las regalías había provocado una lucha en el período de cambio de siglo (XV a XVI), entre secretarios y letrados, con éxito inicial de los primeros, para pasar a las fórmulas híbridas o mixtas (instrucciones de 1528), con clara tendencia a la función de sínodos comisariales compuestos por letrados (1588). Significa ello que el impulso inicial fernandino tuvo continuidad en los de los sucesores que llenaron el siglo XVI, y los ritmos y las formas afectaron en línea de similitud a los componentes de esa Monarquía compuesta en su más alta instancia. En Castilla, el proceso se caracterizó por el afianzamiento de un Consejo de la Cámara exclusivo para la función de gracia.

Consejo, Cámara, Chancillerías, Audiencias constituyen, con los Reyes Católicos, un conjunto institucional que ya refleja las consecuencias de la gobernación sobre territorios dinásticos diversos por unos mismos monarcas. Tanto las Audiencias y Chancillerías como el Consejo y la Cámara llegarán, con los Reyes Católicos, a un grado más satisfactorio de funcionamiento ajustado a derecho. Garriga lo señala, aportando elementos de valoración fehacientes, y De Dios es también concluyente al respecto. El primero, sin embargo, considera que esa línea quebraría a la muerte de Isabel, de modo que el mandato del regente viudo no dejaría de estar sujeto a la utilización política de los medios de gobierno, gracia y justicia que tenía a su alcance. No entraré en la cuestión de si para la construcción de esa red de tribunales se utilizó un “modelo” castellano o aragonés, pero lo cierto es que fue el cónyuge superviviente el que tuvo tiempo para perfilar mejor un conjunto institucional que se multiplicará en tamaño de los años del Emperador, al concentrarse en sus manos una enorme masa dinástica.